

Corrupción y lucha contra la corrupción

Una condición de los estados civilizados es la separación de la acción jurídica y la política.

José Miguel Serrano

Madrid. - Comentaba De Gaulle a su posterior ministro de Información y luego de Educación, Alain Peyrefitte, que los periodistas franceses eran en su mayoría corruptos. No los compraban según el general por vías convencionales sino que sus odiados "anglosajones" modificaban sus voluntades a través de las conferencias y los semestres en universidades estadounidenses. A ello atribuía la incomprensión de los medios franceses a hacia su política de "Grandeur". En España, algún anticorrupto debería dar cuenta de sus acciones antes de sumarse a las cruzadas dirigidas por la policía. Tuviese razón o no el presidente de la República francesa, la anécdota prueba que hay múltiples formas de corrupción, que superan la de los bolsos y perfumes. Debemos añadir, sin embargo, que el poner el propio nombre o el de la administración que se preside en riesgo por la aceptación de los mencionados regalos no es precisamente una prueba de sagacidad política.

Una de las primeras condiciones de los estados civilizados, en los que se espera sin violencia posibilitar la alternancia de Gobierno, y nunca el Gobierno se sostiene frente a la oposición "admitida" por vías ilegales, es la separación de la acción jurídica y policial de los intereses políticos del Gobierno. Eso es lo que distingue a Venezuela de Dinamarca, por poner ejemplos concretos. Resulta en este sentido sorprendente que toda la acción anticorrupción de la policía y los fiscales, por no mencionar a algunos jueces, se centre de forma "alternativa" en un solo partido, que es precisamente el de la oposición y en los momentos de peores encuestas para el Gobierno. Habría que concluir, en ese sentido, que en España, o bien sólo es corrupta la oposición, o bien nos encontramos ante una manipulación sectaria de todas las instituciones, lo que es la peor forma de corrupción. El asunto viene de lejos pues en la anterior legislatura tanto el fiscal general como la policía mostraron un "compromiso" a todas luces excesivo con ese uso alternativo del Derecho.

Lo que demuestra, sin embargo, de forma ejemplar, la situación en la que nos encontramos, es la actitud del Gobierno y su buda judicial, la Vicepresidenta Teresa. Es de suponer que en situaciones así los Gobiernos traten de cuidar sus declaraciones. Nada de esto sucede en España. Desde las celebraciones de los resultados de las acciones en cacerías, donde se producen impúdicas exhibiciones de compadreo entre todos los agentes de la actividad política, hasta las declaraciones en el extranjero de la vicepresidenta abroncadora, entregada a probar que controla toda la situación, la torpeza del Gobierno parece disparatada. Ya ni siquiera se guardan las formas más elementales. Incluso en los estados del socialismo real, el Gobierno tendía a disimular lo que todo el mundo sabía. Aquí no. Descartada la ingenuidad sólo caben dos explicaciones, cada cual más inquietante. Una es que los integrantes del Gobierno no son conscientes de la gravedad de las acciones que emprenden y creen que en un régimen normal la policía y la fiscalía, y no pocos jueces, sirven precisamente para aplastar a la oposición "reaccionaria". La otra es que, aún conscientes de las exigencias de un régimen democrático, creen que en la España actual no es preciso guardar las formas, pues han observado que ciertos comportamientos son impunes ante la inoperancia de la oposición política.

José Miguel Serrano es profesor titular de Filosofía del derecho.